



Revista de Ciencias Ambientales (Trop J Environ Sci). EISSN: 2215-3896.

Junio, 2003. Vol 25(1): 38-48.

DOI: <http://dx.doi.org/10.15359/rca.25-1.5>

URL: www.revistas.una.ac.cr/ambientales

EMAIL: revista.ambientales@una.cr

Oswaldo Durán

Revista de CIENCIAS AMBIENTALES Tropical Journal of Environmental Sciences



Agua: lucha mundial entre capital privado y justicia

Water: global struggle between private capital and justice

Oswaldo Durán



UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA



Los artículos publicados se distribuyen bajo una Creative Commons Reconocimiento al autor-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY NC SA 4.0 Internacional) basada en una obra en <http://www.revistas.una.ac.cr/ambientales>, lo que implica la posibilidad de que los lectores puedan de forma gratuita descargar, almacenar, copiar y distribuir la versión final aprobada y publicada (*post print*) del artículo, siempre y cuando se realice sin fines comerciales y se mencione la fuente y autoría de la obra.

AGUA: LUCHA MUNDIAL ENTRE CAPITAL PRIVADO Y JUSTICIA

por OSVALDO DURÁN

RESUMEN

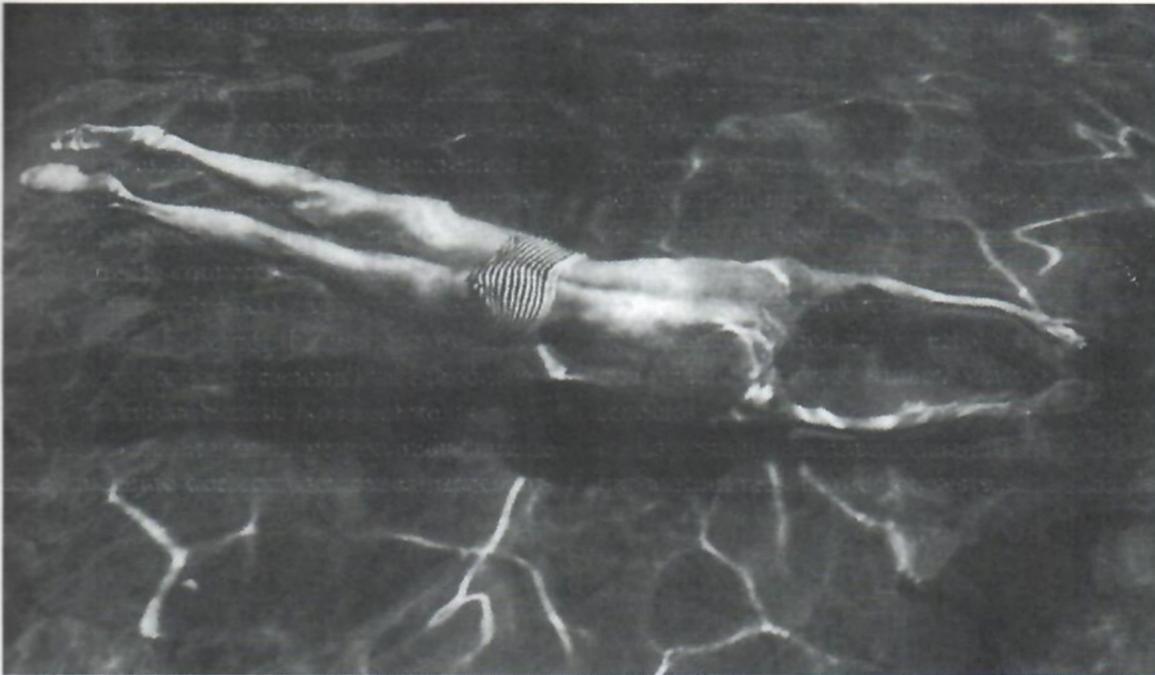
Se da cuenta de la crisis global del recurso hídrico a partir de dos de sus elementos centrales: la escasez global de agua y el contexto internacional al que el autor denomina *geopolítica de los recursos naturales*. Se hace una revisión de las alianzas privatizadoras entre la banca multinacional y organismos civiles, de la beligerancia de las empresas transnacionales del agua y de los fracasos sociales y económicos de la privatización del recurso hídrico. Se concluye argumentando que la privatización del agua resulta inviable socialmente porque implica el deterioro y hasta la pérdida de un derecho humano fundamental y estimula el lucro privado y la concentración de la riqueza nacional y mundialmente.

The global crisis of the hydric resource is taken in to account from two of their central elements: the global shortage of water and the international context that the author denominate "natural resources geopolitics". There is review the private alliances between the multinational banking and civil organisms, the belligerency of transnational water enterprises and the social and economic failures of the hydric resource privatization. There is concluded that the privatization of the water it is not socially feasible because it implicates the damage and lose of a fundamental human right and stimulate the private profit and concentraron of riches at national and worldwide level.

Osvaldo Durán, sociólogo, es presidente de la Asociación Proyectos Alternativos para el Desarrollo Social y profesor en la Universidad de Costa Rica.

Únicamente el 2,5% del agua del planeta es dulce y menos de la mitad de ésta es de fácil acceso para las personas. A escala mundial, el 65% del agua que utilizamos está destinada a la irrigación de cosechas, un 25% se gasta en la industria y un 10% va a hogares y servicios municipales (Barlow 2001). Si el ritmo de destrucción del agua continúa con la celeridad actual, las opciones de desalinizar agua de mar, arrancar y transportar enormes témpanos desde los polos -con todos los desastres asociados para los ecosistemas marinos- y trasladar gigantescas bolsas de agua entre continentes —como de hecho ya se está dando- serán necesarias pero constituirán un privilegio del reducido grupo de personas que concentran la mayor parte de la riqueza mundial.

Actualmente, más de 31 países padecen escasez (un país tiene escasez cuando el suministro anual de agua dulce es inferior a 1.000 metros cúbicos por persona, afectándose todas las posibilidades de desarrollo humano y productivo) y más de 1.000 millones de personas, sobre todo en América Latina, África y Asia, padecen algún grado de falta de agua. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, dentro de 25 años una de cada tres personas en la tierra tendrá poca agua o nada (UNFPA 1998). Otros otean que, en menos de veinte años, 3.000 millones de personas distribuidas en 52 países (un 40% de la población mundial proyectada) tendrá problemas por escasez de agua. El Population Reports de la Universidad Johns Hopkins ha indicado que el crecimiento demográfico por sí solo llevará a que otros 17 países, con una población proyectada de 2.100 millones, pasen dentro de los próximos 30 años a la categoría de países con escasez de agua. Países como China y Pakistán, estarán próximos a sufrir tensión hídrica (suministro anual de agua dulce de entre 1.000 y 1.700 metros cúbicos por persona). La conjunción del aumento de la población con el desarrollo industrial y agropecuario, más la contaminación del agua, están cau-



André Kertész

sando que la demanda, muchas veces convertida en desperdicio y consumo suntuario del líquido, sea mayor a la capacidad del agua para limpiarse mediante su ciclo natural (precipitación, escorrentía, transpiración, evaporación, condensación).

La ausencia de agua acelera procesos como la desertificación, la destrucción de ecosistemas, la reducción de la producción alimentaria, los focos de suciedad y el aumento de enfermedades infecciosas, entre otros efectos negativos. También está demostrada la rápida desaparición de cientos de especies vegetales y animales (20 de cada 100 especies de peces de agua dulce en el mundo están en riesgo de desaparecer). La causa principal de este peligro para la vida en la Tierra, y particularmente en las comunidades, independientemente de su ubicación geográfica, es la destrucción de ecosistemas.

El reto definitivo de la sobrevivencia humana y natural obliga a recuperar los bosques que guardan las fuentes de agua. La crisis mundial de este recurso tiene causa y es parte del deterioro del planeta que el teólogo y ecologista brasileño Leonardo Boff, ha resumido de manera contundente y sencilla: "No pienso que hoy por hoy sea posible repetir el Arca de Noé donde se salvarán solo algunos... Hay que dialogar, es imperativo, porque al planeta lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y si no lo salva nadie, ¡nos ahogamos todos!".

Geopolítica y agua

La crisis hídrica no se reduce al deterioro de los recursos naturales y al sufrimiento y muerte de las personas que no tienen agua o tienen poca y de mala calidad, sino que es un problema político local, nacional y mundial. Los enfrentamientos por agua, inclusive con saldos mortales como en Bolivia, demuestran que la crisis social y política del agua no es un asunto del futuro sino del presente. En la disputa por el control del agua, una de cuyas expresiones más acabadas es la privatización, ya muchos pueblos del Tercer Mundo -no necesariamente países ni gobiernos- se están enfrentando a las transnacionales del agua. Para los países ricos del Norte el control de los espacios geográficos de la Tierra donde se encuentran las reservas de agua dulce es tan estratégico como acaparar los sitios petroleros, de gas natural y los bosques.

La escasez de agua se prevé como un problema extremadamente serio que provocará en un futuro cercano que algunas naciones se vean obligadas a abastecerse de agua de otros países que aún la poseen: se consolidará la nomenclatura de países importadores y exportadores de agua y las disputas por el control del líquido se agudizarán hasta las guerras abiertas. Los conflictos entre Israel y Jordania, Egipto y Etiopía, Turquía y sus vecinos, incluyen el agua como uno de los aspectos de discordia más importantes, llegando incluso a disputas territoriales, de

pago por explotación y exportación de agua, desviación de ríos, acceso a fuentes, etcétera. Cuando los conflictos están relacionados con ríos internacionales, como el Nilo, Grande y San Juan, son aun más álgidos y duraderos. En el caso del San Juan el anacronismo político que impide a Costa Rica navegar por el río hace de toda la franja fronteriza un territorio sobre el que no se puede ejercer vigilancia ni control social y político. Es un corredor de paso libre entre los países donde se acusan serios problemas de pobreza y delincuenciales.

Muchas empresas multinacionales tienen un papel determinante en la crisis del recurso hídrico, ya que el negocio de venta de agua se perfila como extremadamente lucrativo. La conversión del agua en simple mercancía para el lucro privado se está dando a través de su privatización. Empresas que practican la venta de agua embotellada, como Pepsi y Coca Cola, ya están ampliando su oferta de agua con nuevas marcas. Coca Cola predice que su agua embotellada -en algunos países más cara que la gasolina- terminará dando mayores beneficios que sus bebidas gaseosas en muy pocos años. En todo caso, los mayores negocios ligados a la privatización de los servicios de agua los encabezan las transnacionales francesas Suez y Vivendi, que en conjunto con otras multinacionales menores han tejido una red mundial con resultados nefastos para los países en los cuales operan.

El agua se convirtió en elemento clave de la geopolítica de los países más poderosos de la Tierra. Los objetivos estratégicos de los grupos de capital privado que controlan la economía mundial han definido claramente una línea de acción que podemos definir como la *geopolítica de los recursos naturales*. Estados Unidos está a la cabeza de estos grupos de capital global. La prepotencia bélica del gobierno republicano y su desesperación por montar escenarios de guerra están asociadas con su interés por controlar las áreas estratégicas en todo el mundo que son reservas de recursos naturales como petróleo, gas natural, minerales, bosques y agua.

El repunte de la concepción del planeta como cantera de recursos naturales para su explotación y control bélico por el capital, rompe con todas las barreras políticas tradicionales y crea un nuevo mapa según la disponibilidad de recursos naturales. América Latina y Centroamérica,

por sus importantes reservas de petróleo, gas natural, potencial geotérmico, bosques y agua, son áreas energéticas estratégicas. Desde esta perspectiva todos los recursos naturales son reducidos a una condición de mercancías, y los países se convierten en escenarios de intervención y guerra. El objetivo estratégico real del Plan Colombia no es el control de recursos naturales colombianos como el gas natural, los minerales, los bosques y el agua, sino el control de la Amazonia, ya que solo Brasil posee el 17% del agua del mundo, entre el 5 y el 6% del petróleo y es la reserva de bosques más grande del planeta.

Para Mesoamérica una expresión bien acabada de la geoestrategia de los recursos naturales es el Plan Puebla Panamá (PPP), que "constituye una estrategia de acaparamiento directo de las fuentes materiales de riqueza, es decir fuentes de recursos naturales como petróleo, gas natural, bosques, agua, para su control y explotación. La ejecución de los proyectos del PPP conducirá a convertir Mesoamérica en un corredor unificado de inversiones, posibilitando espacios físicos ampliados a capitales nacionales y asegurando un marco político y legal que elimine paulatinamente trabas internas-nacionales al capital privado" (Durán 2002).

El PPP reconoce que Mesoamérica posee "importantes extensiones de bosques tropicales (52% según sus cálculos), abundante disponibilidad de agua y una biodiversidad entre las más ricas del mundo". Señala que éstos recursos naturales son indispensables para asegurar la viabilidad de las estrategias de desarrollo. En la justificación del PPP queda explícito el verdadero valor de uso que el PPP asigna a los bosques, que es el de proveedores del agua para hidroeléctricas. La preservación de la biodiversidad y la cultura indígena en países como México y Guatemala no es una meta del PPP a pesar de que argumente sobre el "respeto del patrimonio cultural indígena". En la actualidad, en la región norte del Petén se producen 25.000 barriles de petróleo al día (0,02% de las reservas probadas). Al aumento proyectado de la explotación petrolera, el plan de inversiones en el marco del PPP incluye un acuerdo entre los gobiernos de México y Guatemala para construir un gasoducto de cerca de 555 km entre Ciudad Pemex y Escuintla al sur de Guatemala (\$350 millones), con proyección de extenderlo desde Arizona hasta Costa

Rica. La amenaza directa contra la Biosfera Maya, la población y la cultura indígena, es una combinación de explotación petrolera y oleoductos ya existentes, gasoducto y construcción de represas hidroeléctricas sobre varios ríos, pero sobre todo en el Usumacinta. Esos proyectos son impuestos y atentan contra la riqueza social, cultural y ecológica. Según las comunidades que se resisten al PPR este plan responde a "intereses geopolíticos y macroeconómicos de EU" y "se contradice absolutamente con las visiones de desarrollo integral de la

población campesina, indígena, trabajadora y pobre de nuestros países" (Ministerio de Energía 2002). Las cinco represas en el río Usumacinta (que significa "lugar del mono sagrado") provocarán más de un millón de desplazados y destrucción de 300 sitios arqueológicos, incluso dentro de la reserva de la Biosfera Maya. La más grande de éstas, será el megaproyecto Boca del Cerro, con una capacidad de 3.978 MW, y entrando en operación en 2011. Su

altura de presa sería de 135 metros y provocaría un embalse de más de 700 kilómetros cuadrados (58% en México). El Plan Colombia y el Puebla-Panamá nos permiten afirmar que lo que en el futuro inmediato podemos esperar es una mayor beligerancia política, económica y militar combinadas, por parte del Norte y especialmente de Estados Unidos, orientada al control de los recursos naturales de la Tierra sin importar su localización geográfica. En cuanto al agua en particular, la geopolítica de los recursos naturales permite comprender la operación de la banca multinacional y las transnacionales del sector con el objetivo de manejar este recurso. El negocio privado del agua es una prioridad en la agenda del capital multinacional, y por esta definición se agudizarán conflictos políticos, económicos, militares y ecológicos en nuestros países.

Privatización del agua y capital privado

La privatización del agua es un conjunto de acciones encaminadas a permitir que los servicios de agua y también las fuentes (nacientes y áreas de recarga), sistemas de abastecimiento - como acueductos, plantas de almacenamiento, tratamiento y distribución- sean controladas por empresas cuya finalidad es su ganancia particular. La privatización parte de la conversión del agua en una simple mercancía para el lucro privado, lo que es contra-



Jaime Garrido

ditorio con la concepción del agua como derecho humano inalienable y con el principio de solidaridad en la distribución y el acceso equitativo de todas las personas a precio justo -es decir, que cada tipo de consumidor pague por su consumo real. Los intentos de privatización en distintas partes del mundo son apoyados por gobiernos, empresas privadas nacionales y transnacionales, algunos organismos financieros internacionales e, inclusive, organismos no guber-

namentales o civiles financiados por empresas privadas e instituciones financieras internacionales -como el Banco Mundial (BM).

En muchos países de América Latina el agua ha sido ya privatizada y es la población más pobre la que está soportando los efectos más negativos por la vía de aumentos de precios, mala calidad y, finalmente, exclusión del servicio. En prácticamente todos los países, grupos privados locales y extranjeros están presionando por eliminar o limitar la participación estatal y de la población organizada en el control de los servicios de agua, para apropiárselos. En la mayoría de los casos, para justificar los procesos de privatización se comienza argumentando sobre la *ingobernabilidad* del agua, con lo cual se promueve el desprestigio de las instituciones estatales y sociales comunitarias administradoras del recurso, y se exalta sus limitaciones -de por sí existentes.

Para los interesados en la privatización no se trata de subsanar debilidades y fortalecer la acción social pública y participativa, sino de eliminarla y allanar el camino a las empresas privadas.

Dado su peso económico global, Estados Unidos es el país con mayor interés en promover la apertura a las inversiones en el negocio del agua, para crear espacio a sus transnacionales y lograr el control directo de recursos en todo el planeta. Según la Red de Ciudadanos sobre Servicios Esenciales (2002), tanto los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio como los *gatt* constituyen amenazas directas contra los servicios públicos esenciales en todo el mundo.

La desestatización es consustancial a las privatizaciones y se impulsa como política oficial desde finales de los años setenta. Todos los programas de ajuste definidos por organismos como el BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido agresivos en cuanto a limitar todas las funciones del estado y traspasar a empresas privadas los servicios con posibilidades de generar altas ganancias. La meta es elevar la concentración de la riqueza a escala nacional e internacional. Los tratados de libre comercio siguen la misma dirección.

Los dos casos más agresivos en cuanto a privatizaciones fueron Inglaterra, en la época Thatcher, y Argentina, cuya subasta terminó de consumir el gobierno de Ménem. En este último país los privados llegaron a controlar cerca del 80% del producto interno bruto y el resultado social de la privatización fue un total fracaso, como ha sido ampliamente demostrado. El caso argentino ilustra adecuadamente el tipo de acuerdo para la privatización que se teje entre un gobierno local, una transnacional y una institución financiera internacional como el BM. Sobre este aspecto, Barlow (2001) indica que "los proyectos de privatización del agua bajo los auspicios del BM fomentan la creación de monopolios y protegen la corrupción rampante y la extorsión, y a menudo se negocian en el mayor de los secretos. Los acuerdos se consideran *propiedad intelectual* y el público permanece ajeno a sus modalidades. La confabulación con dictadores como Suharto en Indonesia es muy frecuente. El Banco suele aportar la parte del león de la inversión mientras que la empresa se lleva los beneficios. La Suez prometió invertir \$1.000 millones para privatizar el sistema de agua de Buenos Aires,

pero terminó invirtiendo únicamente 30 millones; el resto provino de una agencia del BM".

En préstamos para recurso hídrico, las instituciones financieras internacionales establecieron como condición la privatización. Tal imposición se ha hecho efectiva a través de los préstamos de ajuste estructural, y el BM en ocasiones solo presta dinero a través de su Corporación Financiera Internacional, creada exclusivamente para préstamos privados. La misma práctica realiza el Banco Interamericano de Desarrollo. Las políticas de tales instituciones son contradictorias con convenios internacionales de los que ellas son signatarias y, según Hall y Lobina (2001), contradicen, por ejemplo, los acuerdos de la Conferencia de Bonn sobre el Agua -celebrada en 2001-, que establece que ningún donante debe imponer la privatización como condición de financiamiento. El caso de Brasil, donde el 25% de la población carece de agua potable, es elocuente en cuanto a las presiones para la privatización del recurso hídrico por parte de dichas instituciones -particularmente del FMI. En 1999 (Rochefort 2001), el gobierno adquirió con el FMI el compromiso de "vender las compañías estatales y servicios municipales de agua y saneamiento", lo cual resulta absolutamente inseguro no solo por las experiencias vividas en Brasil, sino también a la luz de otros casos como el chileno, donde la privatización de los servicios de agua y saneamiento solo benefició a reducidos grupos de empresarios y creó una situación de caos, ya que cerca del 20% de la población no puede pagar por estos servicios.

La política privatizadora del agua está siendo reforzada directamente por los tratados de libre comercio que los países del norte impulsan como mecanismo actual de control sobre el Tercer Mundo. Según estudios realizados en Canadá, "las opiniones legales señalan que bajo el Tratado de Libre Comercio de las Américas cualquier estuerzo gubernamental para aplicar medidas ambientales y de salud, incluyendo los estándares para el agua potable y las mejoras ordenadas por las oficinas locales de salud pública, podrían ser comprometidas" [el capítulo 11 permite a empresas cuestionar cualquier disposición, reglamento o ley nacional, si consideran que daña sus intereses] (Canadian Union 2002).

Global Water Partnership (GWP) es una de las entidades civiles transnacionales más agresi-

vas en la tarea de preparar el camino de las privatizaciones. Trátase de un organismo de consultores contratados y pagados desde afuera, carente de toda base social -por su origen no intenta organizar comunidades ni potenciar la organización social. Su relación con las sociedades civiles consiste en presentarse como *organismo técnico* especializado en el tema del agua. Su labor de cabildeo va desde el estado -a través de instituciones y ministerios- hasta otras organizaciones civiles con las que intenta establecer relaciones -sea de acción o por la vía del pago de servicios profesionales. Como explica Barlow (2001), "en 1996 se asistió a la creación de un nuevo orga-

representantes del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, con sede en Suiza, y del BM. Otro representante de la Suez Lyonnaise des Eaux, Ivan Cheret, forma parte del Comité Consultivo Técnico de GWP ... La organización tiene por principio que el agua es una *mercancía económica* que tiene un *valor económico en todos sus usos competitivos*, y sirve para asentar las bases de la prioridad que concede GWP a la privatización de los servicios de abastecimiento de este recurso".

Con la misma claridad, Hans Engelberts, secretario general de la Internacional de Servicios Públicos (3.000.000 de afiliados en todo el mun-



Katie Gray

nismo internacional del agua, que se componía más o menos de los mismos actores. El GWP se describe a sí mismo como una *red encaminada a la acción* de organismos interesados en cuestiones relativas al agua y cuya misión consiste en encontrar las *herramientas necesarias en la práctica* para resolver los problemas del agua, sobre todo en los países del Tercer Mundo. Entre sus afiliados figuran numerosas *oenegés*, organizaciones gubernamentales -como la Agencia de Desarrollo Internacional del Canadá, cuya ex-presidenta Margaret Catley-Carlson acaba de ser nombrada presidenta del GWP-, bancos multilaterales y el sector privado. René Coulomb, de la Suez Lyonnaise des Eaux, forma parte del consejo de administración, en el que también figuran

do) ha explicado: "Los responsables de decisiones están actualmente sometidos a una creciente presión para que dejen la explotación del agua en manos del sector privado, generalmente por concesión o contrato administrativo. La división de agua del BM, las empresas transnacionales que operan en ese sector y los organismos como GWR han argumentado que la solución de los problemas del agua es siempre del sector privado, trátase de la privatización, de la cooperación público-privado o de la participación del sector privado. Tal doctrina es prácticamente obligatoria para todos los países en desarrollo. Tanto el BM como el FMI imponen la privatización de alguna forma, como condición para financiar el agua y los servicios sanitarios. Esas instituciones

afirman, en palabras de Thatcher, que no hay alternativa" (Internacional de Servicios 2001).

En documentos del World Water Council (2002) se reconoce que GWP fue creada en 1996 por el BM, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia para promover e implementar la administración integral y sustentable del agua". En esta misma dirección de presentarse como un organismo técnico lejano a los intereses de la privatización, en publicaciones nacionales (GWP 2002) GWP se define como una entidad "para ayudar a los países a convertir en acciones concretas las propuestas de la gestión integrada de recursos hídricos". Desde Costa Rica, GWP opera para toda Centroamérica y está intentando, con beligerancia, ser parte de la discusión sobre recurso hídrico. Si tomamos como punto de partida el origen y la conformación de la dirección de la entidad, GWP sería un ente civil estructuralmente ligado a las distintas iniciativas de privatización, paquete que incluye instituciones financieras internacionales, como BM y FMI, y compañías transnacionales que presionan a gobiernos en todo el mundo para la privatización del agua. Aunque los representantes de GWP en Centroamérica puedan exponer una proclama anti-privatizadora, lo cierto es que esta entidad ha sido pluralmente definida como un ente promotor de la privatización, siendo ahora su objetivo visible el convertirse en interlocutor autorizado y aceptado en la región.

Negocios de las transnacionales del agua

Las francesas Suez-Lyonnaise y Vivendi son las dos empresas privadas transnacionales del agua más grandes del planeta, controlando cerca de dos tercios del agua privada en éste. Pero tal porcentaje podría ser mayor según la Internacional de Servicios Públicos: Vivendi 40%, y Suez 35%. En América Latina han comprado servicios de agua en Colombia, México, Chile, Uruguay, Venezuela, Brasil y otros (ISP 2001).

Vivendi cuenta con un total de 190 sucursales que operan servicios de agua, desechos, construcción, ferrocarriles, servicios de ambiente, energía, etcétera, en todo el mundo. En América del Norte y Latinoamérica, Vivendi tiene 29 empresas subsidiarias que controlan servicios de agua, sistemas de ingeniería de agua, construcción, gestión de desechos, servicios de ambiente

y energía (IPS 2001). Las inversiones se localizan en Canadá, Estados Unidos, Colombia, México, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela, Brasil y Argentina. Suez-Lyonnaise ha llegado a tener 23 empresas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Cuba, Puerto Rico, Uruguay y Bolivia.

Suez-Lyonnaise y Vivendi, además de ser las dos empresas transnacionales del agua más grandes, cuentan con una amplia red de empresas subsidiarias en ramas complementarias como la construcción, materiales, químicas e ingeniería, lo que las hace las competidoras más poderosas. En contratos que implican servicios de construcción, calidad de agua, distribución, etcétera, tienen ventajas comparativas muy importantes sobre las otras transnacionales del agua, que solo pueden atender un campo específico de la distribución. Esto hace que, como el mismo Banco Mundial ha reconocido, la competencia resulte escasa en el negocio del agua.

Vivendi ha logrado tejer una red de relaciones comerciales en todo el mundo a tal punto que sus negocios del agua permiten subsidiar otras de sus compañías como las comunicaciones. Se ha calculado que un sobreprecio del 4% en cada una de las facturas de los clientes de agua, manejo de desechos y transporte de la empresa en todo el mundo, generaron en 1999 la suma de 22.200 millones de euros, los cuales fueron transferidos a la división de comunicaciones, que al cierre de operaciones apareció sin pérdidas (Hall y Lobina 2001). En otras palabras, el pago de agua privada de Vivendi en el mundo, incluidas las facturas de los pobres que la compran, pasan a las arcas de empresas de telecomunicaciones. Ésta es, sin duda, una nueva forma de subsidio del Tercer Mundo a las compañías privadas más grandes del planeta. De esto se concluye, además, que con la venta de un servicio básico de agua se está promoviendo la concentración de la riqueza a escala global.

La revisión de al menos una parte de las transnacionales del agua más poderosas (ver cuadro) permite entender cómo está operando la red privada del agua en América latina. En el marco de una fuerte competencia es evidente que todas visualizan en este continente un elevado potencial hídrico y que están tratando de controlarlo gracias a sus convenios con gobiernos, empresas privadas locales y agentes civiles

AGUA PRIVADA: grandes empresas		
Empresa	País origen	Negocios en: (se hace énfasis en América Latina)
Suez-Lyonnaise	Francia. Controlan dos tercios, o más, del agua privada en el planeta	Colombia, México, Chile, Uruguay, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Puerto Rico, Cuba, Canadá
Vivendi		Colombia, México, Uruguay, Venezuela, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Canadá
Saur	Tercera en Francia, cuarta en el mundo	Argentina trabaja con la empresa italiana de gas Eni y Azurix (era subsidiaria de la estadounidense Enron)
RWE-Thames Water	Inglaterra	Chile, Canadá, México (tiene contratos con Vivendi, serios problemas en Tailandia)
Azurix	EU	Subsidiaria de Enron. Quebró antes que Enron. Parte de sus acciones pasaron a manos de Thames/RWE. Su historial incluye negocios fracasados en Argentina y México
Anglian Water	Inglaterra	Argentina, Brasil, en Chile dos contratos: Aguas Puerto y Esval
Severn Trent	Inglaterra	México -contrato vencido, Trinidad y Tobago
Bjwater	Inglaterra-Holanda	México 100% aguas negras de Puerto Vallarta, Panamá
Aguas de Barcelona	España	Suez es dueña del 51 % de las acciones de Agbar. Suez compró el 100% de la empresa Interagua a Endesa. Endesa es socia del SIEPAC con un capital de \$70 millones. España también financia el proyecto Araucaria en la cuenca del río Savegre en Costa Rica, sobre el que se proyectan tres hidroeléctricas.
Aguas de Bilbao	España	Argentina trabaja con otras italianas también en Uruguay
Dragados Urbaser Dycasa	España	Argentina
Canal de Isabel II	España	Colombia (Barranquilla, Soledad, Santa Marta y Puerto Colombia), Venezuela, República Dominicana, Ecuador
Aguas de Portugal y EdP	Portugal	Brasil. En Chile fue socia de Thames pero le vendió su parte de contrato.
Acea	Italia	Perú, Honduras en asocio con otras transnacionales italianas como Astaldi, una de las constructoras del fracasado proyecto Misicuni de Bolivia. También socia de Aguas de Bilbao, Agba, Suez, Bechtel, y de EdF que es socia de Vivendi.
International water -IWL-	EU	Es 50% de Bechtel y 50% del grupo italiano Edison, pero está registrada en Reino Unido y opera por medio de una compañía intermediaria holandesa Fue concesionaria de Aguas del Tunari (Cochabamba). Controla Interagua en Guayaquil, Ecuador.

Fuentes: IPS. 2002. Hall y Lobina 2001. Sosba 2002a, 2002b. Comunicaciones personales con directores de sindicatos de América Latina.

comúnmente presentados como "facilitadores" de procesos sociales. No solo las transnacionales del agua mayores -Suez-Lyonnaise y Vivendi- están luchando por acaparar el mercado, sino que también, por ejemplo, Aguas de Barcelona ha definido participar en todas las licitaciones de privatización de agua alrededor del mundo, lo que le permitiría perfilar negocios de venta de agua como mercancía final, pero además ligarse con otras empresas dedicadas, por ejemplo, a la hidroelectricidad. Lo que se puede afirmar en este momento, a partir de los contratos de las transnacionales del agua, es que ya definieron

una agresiva estrategia para acaparar el mercado mundial del agua. Esta tendencia resultará cada día más peligrosa para todo el planeta y especialmente para el Tercer Mundo, toda vez que las amenazas por escasez ya han generado conflictos bélicos y muertes.

Si analizamos la operación de los servicios de agua a nivel mundial, podemos concluir que la privatización del agua en América Latina es una contratendencia a la luz del carácter público del servicio en Europa. Prácticamente en la totalidad de los países, con las excepciones de Francia e Inglaterra, el agua es un servicio controlado

por el estado. Lo mismo sucede en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Esta situación pone en evidencia que el control privado del agua es una estrategia del capital transnacional por acaparar negocios y riqueza en todo el mundo. Si en los propios países del Norte está demostrado que el agua debe ser pública, que el estado y las municipalidades son entes capaces de administrar adecuadamente el servicio, entonces la insistencia de imponer la privatización en el Tercer Mundo solo se puede entender como un mecanismo para el favorecimiento de las empresas privadas del agua. El estudio del modelo globalizado de agua privada requiere también develar cómo es que las directrices de los organismos financieros internacionales buscan favorecer a las transnacionales del agua y que en tal dirección es que procuran someter los gobiernos a sus dictados de privatización. Este asunto es de extrema importancia porque el agua se convirtió en un factor de condicionamiento económico por parte del Primer Mundo a los países del Sur. La lucha por la defensa del agua es, en última instancia, una lucha entre capital privado y justicia social, y tiene cada día más un alcance internacional. Si bien los escenarios son nacionales, los contenidos de las disputas no lo son. Lorena, en Guanacaste, sigue siendo un buen ejemplo de comunidades defendiendo local y nacionalmente sus derechos de agua frente a una empresa multinacional como el Grupo Barceló, que ha contado con la colaboración de las autoridades locales y nacionales para expandir sus inversiones.

Para las empresas privadas el agua constituye una mercancía con posibilidades de ganancia ilimitada. En prácticamente todos los países, grupos privados locales y extranjeros están presionando por eliminar o limitar la participación estatal y, fundamentalmente, de la población organizada en el control de los servicios de agua, para apropiárselos como negocios privados lucrativos.

En general, el futuro de los países en los cuales se ha implementado agresivamente la privatización de las empresas estatales es cada día más inseguro desde la perspectiva de la seguridad económica. Bautista Vidal (2002), considerado una de las autoridades brasileñas más destacadas en la materia, indica que "antes del comienzo de las privatizaciones, Brasil era el país del llamado

mundo capitalista que tenía menos participación del estado en la estructura productiva, el 21%, comparado con el 27% de EU. Los otros, Francia, Suecia, Inglaterra, Italia, etcétera, tenían más del 40%. Esos técnicos, si son técnicos, mienten, pues el 70% de nuestro Pib es ya propiedad de no residentes en el Brasil y en breve superará el 90%".

Hay varios indicadores de las desventajas de las privatizaciones en el mundo que es necesario considerar en Costa Rica dadas las crecientes presiones sobre el agua y el intento de entes externos, como organismos financieros internacionales y sus agentes civiles, por legitimarse y convertirse en actores directos en el asunto agua. Podemos enumerar los siguientes: concentración de riqueza vía agua, aumento de tarifas, contratos obligantes y difíciles de romper, gestión deficiente, renuncia de las transnacionales del agua a prestar servicios a quienes no pagan "sus" precios -no precios justos-, uso de ganancias nacionales para otros negocios en el mundo, corrupción, falta de transparencia, secreto y dificultad de regulación.

Conclusiones

Los resultados de la privatización del agua en América Latina permiten comprobar un creciente desajuste social, inequidad, exclusión social y concentración de la riqueza. Algunos aspectos que evidencian ese caos social son los siguientes:

Prácticas monopólicas: El agua privada se está convirtiendo en un monopolio, ya que Vivendi y Suez controlan hasta dos tercios del negocio. Los procesos de privatización no significan, desde ninguna perspectiva, opciones de participación ciudadana y, ni siquiera, repartición empresarial de la riqueza. Más bien están concebidos desde la óptica de la concentración de la riqueza, tanto a nivel nacional como internacional.

Aumentos tarifarios: Los aumentos de tarifas son una norma general, porque el interés de las empresas es el lucro y no la prestación con carácter social del servicio agua. La ruptura de contratos en Argentina y Cochabamba, para citar dos casos, tuvo entre sus detonantes clave el aumento desmedido del precio del agua. Desde esta perspectiva los procesos de privatización apuntan a la exclusión social, sobre todo para los sectores sociales pobres de nuestros países. Esta

lógica rima perfectamente con la concepción radical del capitalismo liberal, bajo la cual el mercado es un escenario únicamente para los que tienen dinero. Los demás, los pobres, son excluidos. En el caso del agua se extirpa por completo el principio de acceso universal al agua como derecho humano fundamental (incluso en Francia el precio del agua se elevó en más del 150% luego de ser privatizada).

Exclusión de los pobres: El acceso universal al agua ha sido catalogado como una "demanda carente de realismo" por el director ejecutivo de la transnacional Saur, pues es imposible -ha dicho- ofrecer "conexiones para todos" como se demanda en el Tercer Mundo, dado que el sector privado no puede satisfacer el volumen de inversión necesario. "La escala de lo que se necesita rebasa con mucho la capacidad financiera y de riesgo del sector privado ... la idea de que el agua paga al agua ya no es realista en los países en desarrollo. Hasta Europa y Estados Unidos subsidian los servicios" (IPS 2002).

Corrupción: Las privatizaciones han sido justificadas como mecanismo de salida ante la insolvencia del estado y como supuesta opción de pago de deuda interna. Sin embargo, al igual que con todos los capitales generados con las ventas de empresas estatales, la deuda interna y la pobreza nunca han decrecido y, por el contrario, lo que se ha propiciado y facilitado es una creciente corrupción con fondos públicos. "Los magis-

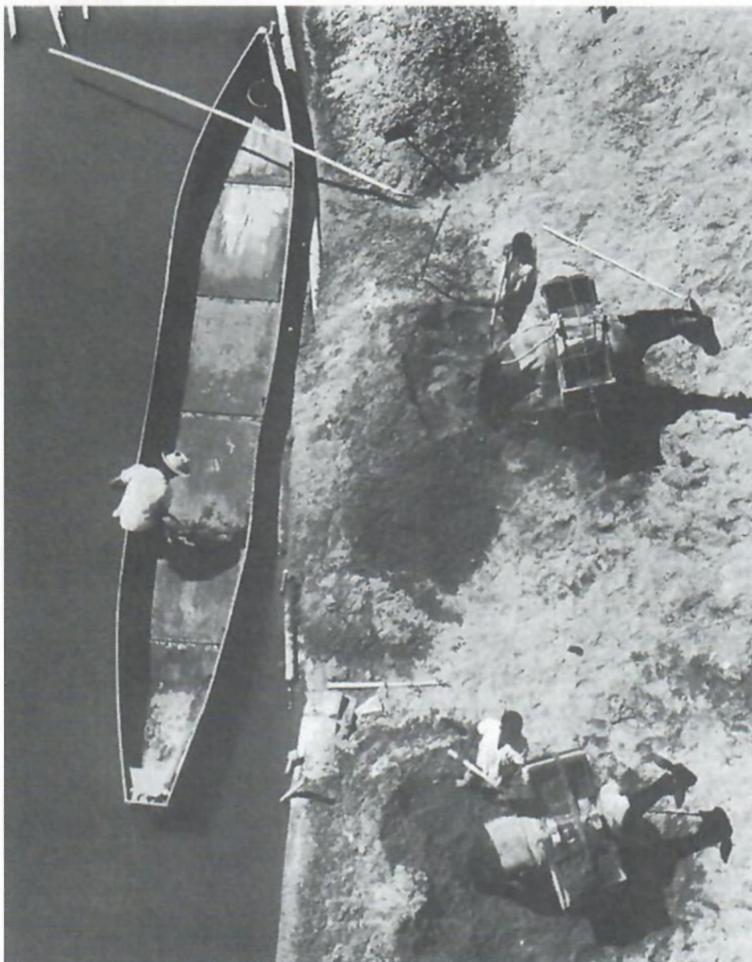
trados franceses han dedicado buena parte del último decenio a la investigación de alegatos de corrupción contra los ejecutivos de las dos mayores sociedades francesas del agua que fueron inculpadas en tres ocasiones por sobornos encaminados a obtener contratos hidrográficos en Francia" (Barlow 2001).

Inversiones condicionadas a la tasa de retomo: Las transnacionales del agua no están dispuestas a realizar inversiones que no sean estrictamente rentables. La lógica de operación es elevar la tasa de retomo de manera que, como ha sucedido

en Argentina y Bolivia, las inversiones se paralicen cuando se trate de atender sectores pobres de la población. Si se trata de grupos sociales que no tienen capacidad de pago de las tarifas establecidas por los privados, entonces quedan excluidos del servicio. Tal ha sido el abuso en esta materia, que en la misma Francia, desde 1996, quedó prohibido para los municipios vender concesiones de agua a empresas privadas,

pues éstas luego cobraban a los usuarios elevadas tarifas para el "costo de entrada" al negocio -es decir, cobrar, además de la tarifa, un sobrecargo para saldar inversiones iniciales, como el pago mismo de la concesión.

Otros aspectos de fondo: Cualquier forma de privatización del agua debería aceptarse solo si queda demostrada la total incapacidad del estado para administrarla. Incluso ante una circunstancia como ésta, la opción de un manejo partici-



Nereo

pativo de los grupos de usuarios y comunidades siempre será una mejor opción que la subasta del agua, pues como queda claro las transnacionales del agua, y las privadas locales, únicamente están preocupadas por elevar su tasa de ganancia. El peligro de la privatización es tal que el esquema de manejo en los países del Norte sigue siendo predominantemente estatal. Lo privado no debería ni siquiera aceptarse como posibilidad cuando se pone en riesgo la seguridad social.

Los casos de Argentina, Bolivia, Trinidad y Tobago y Canadá demuestran que la eficiencia privada es solamente un mito de los promotores de la privatización. En ningún experimento de privatización las empresas han sido capaces de cumplir con los requerimientos de los contratos: obras de construcción sin terminar o mal hechas, sistemas de distribución ineficientes, cortes y suspensiones del servicio, deterioro en la calidad de las aguas, inundaciones, exclusión de los sectores de población más pobres, etcétera. Por el contrario, el caso de Río Grande do Sul, en Brasil, es un ejemplo claro de que el sistema público bien administrado es más eficiente y socialmente justo.

La Conferencia Continental sobre el Agua (Costa Rica julio 2002), realizada por la Internacional de Servicios Públicos, concluyó que la privatización del agua ha generado una creciente exclusión social, dejando a cada vez más gente pobre sin acceso al agua, como lo demuestran los ejemplos de Argentina, Chile y Bolivia. Concluyó también que es evidente el fracaso de las políticas impositivas de los organismos financieros internacionales cuyos objetivos han estado centrados en la transformación o desmantelamiento del estado para impulsar procesos de privatización de los servicios públicos -incluidos los de agua y saneamiento.

Los intereses de tales organismos y de los civiles (ug. GWP) promotores de la privatización, coinciden en muchos casos con los objetivos de los grupos empresariales locales ligados a los gobiernos. En otros casos, desde los gobiernos mismos se promueve la privatización, lo cual es una modalidad de acción estatal clara desde inicios de los ochenta, con los también fracasados programas de ajuste económico.

Referencias bibliográficas

- Barlow, Maude. 2001. *El Oro Azul. La crisis mundial del agua y la reificación de los recursos hídricos del planeta*. Council of Canadians. Canadá.
- Canadian Union of Public Employees. 2002. *Suez and Vivendi in Cañada*. Public Works. Canadá.
- Durán, Osvaldo. "Plan Puebla Panamá, pro capital y contra natura", en *Ambientico* 105, 2002. Costa Rica.
- Global Water Partnership. 2002. *Entre Aguas*. GWP-Centroamérica.
- Hall, David y Emanuelle Lobina. 2002. *La privatización del agua en América latina*. Unidad de investigaciones de la Universidad de Greenwich. London.
- Ministerio de Energía y Minas - Gobierno de México. "Carta dirigida a las comunidades del Petén. 12 de agosto del 2002", en *Petén despierta. Otro Petén es posible*. 2003.
- IPS (Public Services Internacional). 2002. *Sucursales de Vivendi en el mundo*. France.
- Red de Ciudadanos sobre Servicios Esenciales. 2002. *Enfrentando la agenda de privatización*. USA.
- Rocheffort, Theo. "Gobierno propone cambios para el saneamiento ambiental", en *Revista Cuatrimestral de Saneamiento Ambiental. Edición especial*, 20, 2001. Porto Alegre.
- Sosba (Sindicato de obras sanitarias de la provincia de Buenos Aires). 2002a. *Consideraciones sobre Azurix Buenos Aires 5.A*. Buenos Aires.
- Sosba (Sindicato de obras sanitarias de la provincia de Buenos Aires). 2002b. *Breve actualización sobre las privatizaciones en Argentina*. Buenos Aires.
- UNFPA. Fondo de Población de Naciones Unidas. *Informe 1998*.
- Vidal, Bautista. "La privatización es la última frontera de la degradación", en *Dame (Departamento municipal de aguas y saneamiento)*. *ECOS. Combate á exclusao social. Revista cuatrimestral de saneamiento ambiental*. Abril 2002. Porto Alegre. Edición especial N° 21, año 9.
- World Water Council. 2002. *3rd World Water Forum*. Brochur.
- ### Comunicaciones personales
- Moreyra, Alejandra (líder boliviana opositora de la privatización del agua). Guatemala. Abril, 2001.